

SUBDIRECCIÓN DE CONTRAVENCIONES
RESOLUCIÓN No. 20259 DE 2023

Por medio de la cual se procede a resolver la solicitud de Revocación Directa presentada por el señor JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA identificado con cédula de ciudadanía No. 1030681735 contra la Resolución No. 2334384 del 2 de diciembre de 2022

En Bogotá D.C., la SUSCRITA AUTORIDAD DE TRÁNSITO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confieren los artículos 29, 83 y 209 de la Constitución Política, la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), modificado por la Ley 1383 de 2010 (Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones), la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el Decreto 672 de 2018 (Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones), Resolución 236 del 13 de diciembre de 2018, Resolución 465 del 17 de diciembre de 2019, Resolución 150112 del 26 de junio de 2023 (Por medio de la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleados públicos de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Movilidad), procede a resolver la solicitud de revocación directa presentada en contra de la Resolución No. **2334384 del 2 de diciembre de 2022**, con relación a la orden de comparendo No. **1100100000035274336 de 30 de septiembre de 2022**, previo los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En atención al radicado No. **202361201029552** y traslado con Memorando No. **202342100198783**, el señor **JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA** con cédula de ciudadanía No. **1030681735**, mediante el cual solicita la revisión de los comparendos electrónicos No. **1100100000035274334** y **1100100000035274336 de 30 de septiembre de 2022**, en los cuales se evidencia una doble sanción bajo la misma infracción y circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Es importante señalar, que esta Autoridad de tránsito por competencia, sólo estudiará los comparendos en cuanto a la procedencia o no de la Revocatoria directa, razón por la cual, los demás puntos de la solicitud (en caso de existir) deben o debieron ser contestados por el competente que conoció la petición inicialmente.

Por lo anterior, este Despacho procede a realizar la verificación en el Sistema de información contravencional SICON y en el expediente, frente a los comparendos en mención, encontrando:

1. El día **30 de septiembre de 2022** se impuso la orden de **comparendo electrónico** No. **1100100000035274334 de 30 de septiembre de 2022**, al señor **JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA** con cédula de ciudadanía No. **1030681735** en calidad de propietario del vehículo de placa **YGI60F**, por incurrir presuntamente en la infracción **D02** siendo las **9:12:23 AM horas**, actuación realizada mediante FOTO DETECCIÓN (CÁMARAS SALVAVIDAS) a cargo del agente de tránsito **ANDRÉS LEONARDO RUBIANO GÓMEZ**. Así mismo, dicho comparendo figura con estado de Cartera **VIGENTE - SALDO PENDIENTE DE PAGO POR \$937.000 INTERESES \$100.250**. Como se muestra a continuación:

Información General						
Organismo de Tránsito	11001-TRANSITO BOGOTA		Deuda Solidaria			
Tipo Cartera	1-COMPARENDOS		Nro. Factura	35274334		
Tipo Doc.	1-CEDULA DE CIUDADANIA		Nro. Doc.	1030681735		
Placa	YGI60F		Saldo Doc.	937000		
Consecutivo Cartera	27528738		Intereses	100250		
Concepto Cartera	94 COMPARENDOS					
Fecha Documento	09/30/2022		Fecha proceso	10/04/2022		
Estado	1 VIGENTE		Pagos			
			Cantidad LVT	22.09		
Notas de Cartera						
Fecha Concepto	Fecha Proceso	Nota Soporte	Concepto	Débito	Crédito	Usuario
09/30/2022	10/04/2022		COMPARENDOS...	937000		USUARWEB

SUBDIRECCIÓN DE CONTRAVENCIONES
RESOLUCIÓN No. 20259 DE 2023

Por medio de la cual se procede a resolver la solicitud de Revocación Directa presentada por el señor JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA identificado con cédula de ciudadanía No. 1030681735 contra la Resolución No. 2334384 del 2 de diciembre de 2022

2. Que el día 30 de septiembre de 2022 se impuso la orden de comparendo electrónico No. 11001000000035274336, al señor JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA con cédula de ciudadanía No. 1030681735 en calidad de propietario del vehículo de placa YGI60F, por incurrir presuntamente en la infracción D02 siendo las 9:12:23 AM horas, actuación realizada mediante FOTO DETECCIÓN (CÁMARAS SALVAVIDAS) a cargo de la agente de tránsito MARIA DEL CARMEN GIRALDO HENAO. Así mismo, dicho comparendo figura con estado de Cartera VIGENTE - SALDO PENDIENTE DE PAGO POR \$937.000 INTERESES \$100.250. Como se muestra a continuación:

Información General						
Organismo de Tránsito	11001-TRANSITO BOGOTA	Deuda Solidaria				
Tipo Cartera	1-COMPARENDOS	Nro. Factura	35274336			
Tipo Doc.	1-CEDULA DE CIUDADANIA	Nro. Doc.	1030681735			
Placa	YGI60F	Saldo Doc.	937000			
Consecutivo Cartera	27528737	Intereses	100250			
Concepto Cartera	94 COMPARENDOS					
Fecha Documento	09/30/2022	Fecha proceso	10/04/2022			
Estado	1 VIGENTE	Pagos				
		Cantidad UVT	22.09			
Notas de Cartera						
Fecha Concepto	Fecha Proceso	Nota Soporte	Concepto	Débito	Crédito	Usuario
09/30/2022	10/04/2022		COMPARENDOS...	937000		USUARWEB

3. En fecha 2 de diciembre de 2022 la Autoridad de tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad profirió la Resolución sancionatoria No. 2334384, mediante la cual se declaró contraventor de las normas de tránsito al señor JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA identificado con cédula de ciudadanía No. 1030681735, que fue notificada en estrados y se encuentra debidamente ejecutoriada. En razón a que, una vez cumplido el término legalmente establecido, sin que el presunto contraventor compareciera ante la Autoridad de tránsito con el fin de resolver su responsabilidad contravencional respecto a la orden de comparendo No. 11001000000035274336 de 30 de septiembre de 2022, se dio aplicación al artículo 136 de la Ley 769 de 2002, reformado por la Ley 1383 de 2010 en su artículo 24, modificado por el artículo 205 del Decreto 019 de 2012 que a su tenor literal indica: "...la Autoridad de tránsito, después de treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta infracción, seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados...".

II. CONSIDERACIONES

En aras de resolver la solicitud presentada por el señor JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA, este Despacho procede a realizar el análisis jurídico de la situación originada con ocasión a la expedición del comparendo No. 11001000000035274336 de 30 de septiembre de 2022, a fin de garantizar el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución política, siendo pertinente realizar las siguientes consideraciones jurídicas:

La Ley 769 de 2002, Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, señala:

"ARTÍCULO 129. (...) PARÁGRAFO 2o. Las ayudas tecnológicas como cámaras de video y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la imposición de un comparendo.

SUBDIRECCIÓN DE CONTRAVENCIONES
RESOLUCIÓN No. 20259 DE 2023

Por medio de la cual se procede a resolver la solicitud de Revocación Directa presentada por el señor JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA identificado con cédula de ciudadanía No. 1030681735 contra la Resolución No. 2334384 del 2 de diciembre de 2022

ARTÍCULO 137. (...) INFORMACIÓN. En los casos en que la infracción fuere detectada por medios que permitan comprobar la identidad del vehículo o del conductor el comparendo se remitirá a la dirección registrada del último propietario del vehículo.

La actuación se adelantará en la forma prevista en el artículo precedente, con un plazo adicional de seis (6) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, para lo cual deberá disponerse de la prueba de la infracción como anexo necesario del comparendo.

Si no se presentare el citado a rendir sus descargos ni solicitare pruebas que desvirtúen la comisión de la infracción, se registrará la sanción a su cargo en el Registro de Conductores e infractores, en concordancia con lo dispuesto por el presente código. **Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-530 de 2003, en el entendido, que sólo se puede culminar la actuación, cuando la administración haya agotado todos los medios a su alcance para hacer comparecer al citado y, cuando el propietario no coincida con el conductor, esa citación no implica vinculación alguna. Así mismo, deberá entenderse que la sanción sólo puede imponerse cuando aparezca plenamente comprobado que el citado es el infractor.**

PARÁGRAFO 1o. El respeto al derecho a la defensa será materializado y garantizado por los organismos de tránsito, adoptando para uso de sus inculpados y autoridad, herramientas técnicas de comunicación y representación de hechos sucedidos en el tránsito, que se constituyan en medios probatorios, para que en audiencia pública estos permitan sancionar o absolver al inculpadado bajo claros principios de oportunidad, transparencia y equidad (...). (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Ahora bien, es de señalar que para las situaciones no reguladas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), el Artículo 162 de la misma norma estableció la remisión a otros códigos, como seguidamente preceptúa:

“ARTÍCULO 162. Compatibilidad y Analogía. Las normas contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo de lo contencioso Administrativo, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Y Código de procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código, **en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista para caso en análisis (...)**”. (Negrilla fuera de texto)”.

Entrando en materia, es importante resaltar que, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, la revocación directa, es la facultad de la Administración para modificar o desaparecer de la vía jurídica, **los Actos que ella misma ha expedido con anterioridad**, siempre y cuando estos actos sean manifiestamente contrarios a la Constitución o la ley, que no se encuentren conformes con el interés público o social, y finalmente, cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona.

De lo anterior, se colige que, para proceder a la aplicabilidad de la figura jurídica de Revocación directa en materia de tránsito, se debe dar cumplimiento a lo normado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regula lo concerniente a esta materia:

“ARTÍCULO 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda.

Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud.

Contra la presente decisión que resuelve el recurso de revocatoria directa no procede recurso alguno.

ARTÍCULO 96. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.

ARTÍCULO 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. (...) Cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter

SUBDIRECCIÓN DE CONTRAVENCIONES
RESOLUCIÓN No. 20259 DE 2023

Por medio de la cual se procede a resolver la solicitud de Revocación Directa presentada por el señor JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA identificado con cédula de ciudadanía No. 1030681735 contra la Resolución No. 2334384 del 2 de diciembre de 2022

particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

ARTÍCULO 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Respecto a ésta última causal, se ha señalado, que la misma procede cuando se ha causado un **daño injustificado** a quien no tiene el deber jurídico de soportarlo, es decir, que la misma resulta procedente en los casos en que pese a existir un Acto administrativo lícito, éste ha generado un daño antijurídico a quien no debía recibirlo.

Conforme a lo antes mencionado, es preciso citar la sentencia T-485-2005 (4 de marzo de 2005) dentro del expediente T1047303 – Magistrado ponente Doctor Jaime Araujo Rentería, al respecto preceptúa:

“... Según jurisprudencia reiterada por esta Corporación en el Estado de Derecho los actos de las entidades públicas pueden ser controvertidos a través de las acciones consagradas en el Código Contencioso, o, acudiendo directamente ante la Administración para que sea ésta y no los jueces, quien resuelva sus inquietudes, como lo es el recurso de revocación directa que “(...) asegura un instrumento gubernativo para obtener en cualquier tiempo el restablecimiento del derecho conculcado y que la Administración mantenga la vigencia y el vigor del ordenamiento jurídico (...)”¹.

Así mismo, respecto a la procedencia de la Revocación directa la Corte Constitucional mediante Sentencia C-742/99, con ponencia del Honorable Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, ha precisado lo siguiente:

“La revocación directa tiene como propósito el de dar a la autoridad la oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino por una causa de interés general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público. La persona afectada sí puede en principio pedir a la Administración que revoque su acto, o la autoridad puede obrar de oficio. Cosa distinta es que el interesado, a pesar de haber hecho uso de los recursos existentes, pretenda acudir a la vía de la revocación directa, a manera de recurso adicional, lo cual puede prohibir el legislador, como lo hace la norma acusada, por razones de celeridad y eficacia de la actividad administrativa (artículo 209 C.P.) y además para que, si ya fueron agotados los recursos, el administrado acuda a la jurisdicción.

La revocación directa es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo; pero, también es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona”.

¹ Sentencia C-339 de 1996, M.P. Julio César Ortiz Gutiérrez.

SUBDIRECCIÓN DE CONTRAVENCIONES
RESOLUCIÓN No. 20259 DE 2023

Por medio de la cual se procede a resolver la solicitud de Revocación Directa presentada por el señor JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA identificado con cédula de ciudadanía No. 1030681735 contra la Resolución No. 2334384 del 2 de diciembre de 2022

De lo expuesto se colige, entonces, que existe ilustración suficiente respecto de la finalidad de la Revocación directa, de sus formalidades y oportunidad, a más que existe fundamento jurisprudencial respecto de la facultad que le genera ésta figura a la administración, para corregir sus actuaciones de oficio o a petición de parte, siempre y cuando se tipifique alguna de las causales determinadas para tal efecto.

Por otra parte la **Corte Constitucional en sentencia C-038 de 2020** estableció que, “en el ejercicio de la reserva constitucional de ley en materia sancionatoria, le corresponde al Congreso de la República el diseño de la política punitiva del Estado y, en particular, determinar con precisión todos los elementos de la responsabilidad sancionatoria, **así como sus consecuencias, garantizando, no obstante, los derechos de la defensa y los principios de imputabilidad personal y culpabilidad, que impiden, cada uno, que se responda por el hecho ajeno (pago de la multa, reincidencia, suspensión de la licencia, etc.) y de manera objetiva. Por lo tanto, la regulación en la materia que expida el Congreso de la República podría prever una responsabilidad solidaria para el pago de las multas, por hechos total o parcialmente imputables al propietario del vehículo, que no impliquen el acto de conducir y se refieran al estado de cuidado físico-mecánico del vehículo (luces, frenos, llantas, etc.) o al cumplimiento de obligaciones jurídicas, tales como la adquisición de seguros o la realización de las revisiones técnico mecánicas. Tales obligaciones recaen tanto sobre el conductor, como sobre el propietario del vehículo, incluso si éste es una persona jurídica, no conduce o no dispone de la licencia para conducir. Sin embargo, al tratarse de normas de contenido sancionatorio, los sujetos responsables, las infracciones y las sanciones, deben estar determinados por el Legislador de manera previa y cierta, como garantías del derecho al debido proceso.** (Subrayado fuera de texto).

De lo anterior se concluye que, la reserva constitucional en materia sancionatoria está en cabeza del Congreso de la República y es por ello que **el legislador consagró obligaciones en cabeza de los propietarios de los vehículos automotores a través del artículo 10 de la Ley 2161 de 2021**, cuya violación implicará la imposición de las sanciones previstas en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito modificado por la Ley 1383 de 2010 para los comportamientos descritos en dicha norma, a saber:

“ARTÍCULO 10° de la Ley 2161 de 2021. Medidas Antievasión. Los propietarios de los vehículos automotores deberán velar porque los vehículos de su propiedad circulen:

- a. Habiendo adquirido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito,
- b. Habiendo realizado la revisión tecnicomecánica en los plazos previstos por la ley,
- c. Por lugares y en horarios que estén permitidos,
- d. Sin exceder los límites de velocidad permitidos,
- e. Respetando la luz roja del semáforo.

La violación de las anteriores obligaciones implicará la imposición de las sanciones previstas en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito modificado por la Ley 1383 de 2010 para dichos comportamientos, previo el cumplimiento estricto del procedimiento administrativo contravencional de tránsito”. (Subrayado del Despacho).

III. CASO EN CONCRETO

Así las cosas, este Despacho una vez analizadas las actuaciones procesales adelantadas por la Secretaría Distrital de Movilidad con ocasión a la imposición de la orden de comparendo No. **11001000000035274336** de **30 de septiembre de 2022**, realiza las siguientes precisiones a saber:

Se observa que, encontrándose el vehículo de placa **YGI60F** transitando por la **AV BOSA -CR 78F (E/O)** en la ciudad de **BOGOTÁ DC (BOSA)**, fue impuesta en vía la orden de **comparendo electrónico** No. **11001000000035274334** con código de infracción **D02**, siendo las **9:12:23 AM** horas del día **30 de septiembre de 2022**, actuación realizada mediante FOTO DETECCIÓN (CÁMARAS SALVAVIDAS) a cargo de la agente de tránsito **ANDRÉS LEONARDO RUBIANO GÓMEZ**. De igual forma, se evidencia que el mismo día, esto es, el **30 de septiembre de 2022** siendo las **9:12:23 AM** horas y mientras circulaba por la **AV BOSA -CR 78F**

SUBDIRECCIÓN DE CONTRAVENCIONES
RESOLUCIÓN No. 20259 DE 2023

Por medio de la cual se procede a resolver la solicitud de Revocación Directa presentada por el señor JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA identificado con cédula de ciudadanía No. 1030681735 contra la Resolución No. 2334384 del 2 de diciembre de 2022

(E/O) en la ciudad de **BOGOTÁ DC (BOSA)**, fue elaborada la orden de **comparendo electrónico** No. **11001000000035274336**, al propietario del vehículo de placa **YGI60F**, por la infracción **D02**, actuación realizada mediante FOTO DETECCIÓN (CÁMARAS SALVAVIDAS) a cargo de la agente de tránsito **MARIA DEL CARMEN GIRALDO HENAO**.

De allí que deba colegirse que los citados comparendos, fueron impuestos bajo la misma infracción y circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Se tiene entonces que, respecto al comparendo No. **11001000000035274334** fue proferida la Resolución sancionatoria No. **2341356** de **2 de diciembre de 2022**, mediante la cual se le declaró contraventor de las normas de tránsito al señor **JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA** identificado con cédula de ciudadanía No. **1030681735** en calidad de propietario del vehículo de placa **YGI60F**, por la comisión de la infracción **D02**, notificándose en estrados en virtud de lo preceptuado en el artículo 139 del Código Nacional de Tránsito. Así mismo, dicho comparendo figura con estado de Cartera **VIGENTE - SALDO PENDIENTE DE PAGO POR \$937.000 INTERESES \$100.250**.

Frente al comparendo No. **11001000000035274336**, es pertinente anotar que ante la no comparencia del señor **JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA** identificado con cédula de ciudadanía No. **1030681735**, fue proferida la Resolución sancionatoria No. **2334384** del **2 de diciembre de 2022**, mediante la cual se le declaró contraventor de las normas de tránsito por la comisión de la infracción **D02**, notificándose en estrados en virtud de lo preceptuado en el artículo 139 del Código Nacional de Tránsito. Así mismo, dicho comparendo figura con estado de Cartera **VIGENTE - SALDO PENDIENTE DE PAGO POR \$937.000 INTERESES \$100.250**.

Encuentra evidente este Despacho que, por la comisión de dicha conducta contravencional, esto es, la infracción **D02**, se impusieron dos órdenes de comparendo al mismo vehículo en iguales circunstancias de día, hora y lugar, de donde se concluye que se sancionó dos veces una idéntica conducta, siendo esto contrario al principio constitucional y penal de "**non bis in idem (Latín: No dos veces por lo mismo)**". Al respecto se tiene que el principio **non bis in idem** hace referencia a la prohibición de multar y/o sancionar doblemente cuando hay identidad de sujeto, mismo hecho y fundamento, y en el caso que nos ocupa, se cumplen estos presupuestos.

De otra parte, en el artículo 29 de la Constitución política se establece el derecho al debido proceso, y pese a que, en la norma constitucional únicamente se hace expresa la obligatoriedad de aplicación de la **non bis in idem** para vulneraciones al régimen penal, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia lo ha hecho extensible a todo tipo de actuación administrativa; es decir, a todo tipo de Actos en donde el Estado tiene la facultad de **imponer sanciones a los administrados**. Asimismo, la Corte Constitucional ha sostenido que la existencia de un proceso o sanción de naturaleza penal no implica el desconocimiento del principio **non bis in idem** cuando se persigue sancionar la misma conducta, pero por vulneración a un régimen distinto.

Conforme a lo señalado por la Corte Constitucional:

"(...) PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Fundamento. Esta Corporación ha establecido que los fundamentos de existencia del principio non bis in idem son la seguridad jurídica y la justicia material.

"(...) PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Extensión a un ámbito diferente al penal/PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Forma parte del debido proceso sancionador. La jurisprudencia constitucional ha extendido el principio non bis in idem a un ámbito diferente al penal, puesto que ha estimado que éste forma parte del debido proceso sancionador. De tal manera que cuando la finalidad de un régimen es regular las condiciones en que un individuo puede ser sancionado personalmente en razón a su conducta contraria a derecho, este principio es aplicable.

"(...) PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Extensión al derecho sancionatorio. La aplicación del principio non bis in idem no está restringida la derecho penal, sino, como lo ha dicho esta Corporación, "se hace extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio del cual forman parte las categorías del derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el

SUBDIRECCIÓN DE CONTRAVENCIONES
RESOLUCIÓN No. 20259 DE 2023

Por medio de la cual se procede a resolver la solicitud de Revocación Directa presentada por el señor JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA identificado con cédula de ciudadanía No. 1030681735 contra la Resolución No. 2334384 del 2 de diciembre de 2022

derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico especial ético - disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los Congresistas)". El principio analizado hace parte de las garantías a las que tiene derecho el sindicado, en sentido amplio, por procesos disciplinarios.

(...) PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Función. La función de este derecho, conocido como el principio non bis in idem, es la de evitar que el Estado, con todos los recursos y poderes a su disposición, trate varias veces, si fracasó en su primer intento, de castigar a una persona por la conducta por él realizada, lo cual colocaría a dicha persona en la situación intolerable e injusta de vivir en un estado continuo e indefinido de ansiedad e inseguridad. Por eso, éste principio no se circunscribe a preservar la cosa juzgada, sino que impide que las leyes permitan, o que las autoridades busquen por los medios a su alcance, que una persona sea colocada en la situación descrita.

(...) PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Alcance. El principio non bis in idem prohíbe que una persona, por el mismo hecho, (i) sea sometida a juicios sucesivos o (ii) le sean impuestas varias sanciones en el mismo juicio, salvo que una sea tan solo accesoría a la otra...².

En consecuencia, este Despacho evidencia en el caso sub examine la vulneración al derecho al debido proceso que le asiste al aquí accionante, al imponerle dos órdenes de comparendo bajo la misma infracción y circunstancias de tiempo, modo, lugar. Por lo que, teniendo en cuenta los antecedentes mencionados procederá a **REVOCAR** la Resolución No. **2334384** del **2 de diciembre de 2022** respecto del comparendo No. **1100100000035274336** de **30 de septiembre de 2022**. Toda vez que, el comparendo No. **1100100000035274334** de **30 de septiembre de 2022** se encuentra en estado de cartera **VIGENTE - SALDO PENDIENTE DE PAGO POR \$937.000 INTERESES \$100.250**, y no le aplican las causales de Revocación contenidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

En razón a lo anterior, se registrará en el Sistema de información contravencional SICON la presente decisión en relación con el comparendo No. **1100100000035274336** de **30 de septiembre de 2022**, y se deberán adelantar las modificaciones a que haya lugar en el sistema SIMIT.

Así mismo, en ocasión al error en que se incurrió al momento de imposición del citado comparendo, este Despacho considera necesario comunicar esta decisión a la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte, a fin de que sean evitadas a futuro inconsistencias semejantes que afecten de fondo la investigación contravencional.

Cabe agregar, que contra la presente decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el inciso 3° del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución sancionatoria No. **2334384** del **2 de diciembre de 2022**, en donde se declaró contraventor de las normas de tránsito al señor **JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA** identificado con cédula de ciudadanía No. **1030681735**, por los motivos expuestos en la parte considerativa del presente proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: REGISTRAR en el Sistema de información contravencional SICON la presente decisión, en relación con la orden de comparendo No. **1100100000035274336** de **30 de septiembre de 2022**.

² Magistrado Ponente: **Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA**. Expediente D-3987. Bogotá, D.C. Quince (15) de octubre de dos mil dos (2002). LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

**SUBDIRECCIÓN DE CONTRAVENCIONES
RESOLUCIÓN No. 20259 DE 2023**

Por medio de la cual se procede a resolver la solicitud de Revocación Directa presentada por el señor JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA identificado con cédula de ciudadanía No. 1030681735 contra la Resolución No. 2334384 del 2 de diciembre de 2022

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de la presente decisión a la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte, a fin de que sean evitadas a futuro inconsistencias semejantes que afecten de fondo la investigación contravencional.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido de la presente providencia al señor **JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA** identificado con cédula de ciudadanía No. **1030681735**.

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente decisión a la Dirección de Gestión de Cobro, con el fin de que sea considerada en el desarrollo del proceso coactivo adelantado en contra del señor **JULIÁN ALEXANDER OSORIO TOLOZA** identificado con cédula de ciudadanía No. **1030681735**.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el inciso 3° del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Bogotá D.C., el día **9 de noviembre de 2023**.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


CRISTIAN MAURICIO LUGO ROPERO
AUTORIDAD DE TRÁNSITO
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

PROYECTÓ: LILIANA BUSTOS MORENO – PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRAVENCIONES


Liliana B